

RESOLUCION N. 00708

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DEL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”.

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, modificada por la Resolución 046 del 13 de enero de 2022 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que mediante derecho de petición con radicado No. 2013ER089939 del 22 de julio de 2013, interpuesto por la representante legal de la Urbanización Quintas de Provenza quien reporta actividades de disposición inadecuada de escombros en predio privado.

Que funcionarios de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente, realizaron visita técnica de inspección el día 14 de agosto de 2013.

Que mediante radicado N° 2013EE104661 la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital dio respuesta a la solicitud interpuesta mediante derecho de petición con radicado N°. 2013ER089939.

Que funcionarios de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente realizaron visita técnica de inspección el día 11 de marzo de 2014.

Que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente emitió concepto técnico N° 2667 el día 02 de abril de 2014, el cual estableció lo siguiente:

“(…)

3. ANÁLISIS AMBIENTAL

Con base en las visitas citadas en el apartado Antecedentes – llevadas a cabo por parte de funcionarios vinculados a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, de la Secretaría Distrital de Ambiente se procede a realizar la evaluación de impactos ambientales generados:

Impactos ambientales

A continuación, se relacionan los bienes de protección que fueron afectados por actividades de relleno con escombros y otros residuos sólidos en los predios de Promotora San Diego S.A En liquidación:

Tabla 1. Bienes de protección afectados

SISTEMA	SUBSISTEMA	COMPONENTE	AFECTACION
MEDIO FISICO	MEDIO INERTE	Aire	La disposición de RCDs sin protección afecta la calidad de aire de los ciudadanos del Distrito Capital ya que el material particulado se integra a la atmósfera por acción del viento.
		Suelo y Subsuelo	El relleno con escombros sin tener en cuenta lineamientos exigidos por las autoridades ambientales conlleva a cambios en la función, composición (aumento de compuestos químicos en los suelos) y estructura impidiendo su óptimo drenaje así como la compactación de suelo y subsuelo
		Aguas superficial y Subterráneas	Si bien en el predio no se evidencia agua superficial, la disposición de RCD en suelo blando altera la calidad de las aguas subterráneas puesto que las partículas de material se incorporan y arrastran por escorrentía en épocas de lluvia.
	MEDIO BIÓTICO	Fauna y Flora	Proliferación de vectores como roedores
	MEDIO PERCEPTIBLE	Unidades del paisaje	Detrimento paisajístico de los habitantes del sector.

4. CONCEPTO TÉCNICO

Dado que durante las visitas técnicas se evidenciaron afectaciones a diferentes componentes ambientales, se relaciona a continuación la matriz para la identificación de afectaciones, que resume las actividades evidenciadas y los bienes de protección afectados:

	BIENES DE PROTECCIÓN AFECTADOS
ACTIVIDAD QUE GENERA	

AFECCIÓN	AIRE	SUELO Y SUBSUELO	UNIDADES DEL PAISAJE	FLORA Y FAUNA	AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
NIVELACIÓN (RELLENO) CON MATERIALES SÓLIDOS (RCDs, RESIDUOS ORDINARIOS Y ESPECIALES) DESCUBIERTOS	X	X	X	X	X

5. CONSIDERACIONES FINALES

Se solicita al grupo jurídico de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP, analizar el presente concepto técnico y adelantar las acciones de su competencia en los cuales se requiera al propietario o a quien haga las veces de representante legal realizar el retiro del material de escombros y otros residuos sólidos que se encuentran afectando el predio Así mismo, dado que las acciones de relleno sin contar con lineamientos y permisos emitidos por esta Entidad contravienen lo estipulado en la normatividad ambiental, se solicita dar inicio al proceso sancionatorio ejerciendo las acciones de control propio de esta Secretaría

(...).

Que mediante **Auto No. 02687 del 22 de mayo de 2014**, la Dirección de Control Ambiental dispuso iniciar Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental en contra de la PROMOTORA SAN DIEGO S.A. EN LIQUIDACIÓN, NIT 800.156.101-8, a través de su representante legal o quien haga sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental.

Que el anterior acto administrativo se notificó a través de aviso el día 06 de julio de 2015, con constancia de ejecutoria del día 07 de julio de 2015.

Que mediante Radicado No. 2014EE114467 del 10 de julio de 2014, el anterior Auto fue comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios, de conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

Que de conformidad a lo estipulado en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, se procedió a publicar el Auto de inicio No. 02687 del 22 de mayo de 2014, el día 02 de julio de 2015 en el Boletín Legal de esta Entidad.

Que mediante radicado 2015E166656 del 03 de septiembre de 2015, la Secretaría Distrital de Ambiente realizo ante el Subsecretario General y de Control Disciplinario la remisión de actos administrativos originales para lo de su competencia.

Que previo a continuar con la actuación se verifico el expediente, encontrando un error en la dirección de envío de las comunicaciones para surtir la notificación al investigado, ya que las comunicaciones fueron dirigidas a la Avenida 13 N° 108 A – 20 oficina 202 de Bogotá, cuando debieron remitirse a la Carrera 45 N° 108 A – 20 oficina 202 de esta ciudad.

Que mediante **Auto No. 06155 del 11 de diciembre de 2015**, la Dirección de Control Ambiental dispuso ordenar la debida notificación del Auto No 02687 del 22 de mayo de 2014, por medio de1 cual se inició proceso administrativo en contra de la sociedad **Promotora San Diego S.A**, con NIT 800.156.101-8, a través de su representante legal señor Jesús Ángel Fierro Ávila, identificado con cédula de ciudadanía 19.371.610, o quien haga sus veces, la cual deberá surtirse conforme lo preceptuado en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y por ende ha de enviarse comunicación de citación para surtir la notificación personal, en la Carrera 45 No. 108 A - 20 of 202 de esta ciudad.

Que el anterior acto administrativo se notificó a través de aviso fijado el día 03 de octubre de 2016 y retirado el día 07 de octubre de 2016, con constancia de ejecutoria del día 26 de octubre de 2016.

Que mediante **Auto No. 02268 del 27 de junio de 2019**, la Dirección de Control Ambiental dispuso Formular en contra de la sociedad **PROMOTORA SAN DIEGO S A EN LIQUIDACION**, con NIT 800.156.101-8, el siguiente cargo:

*“**CARGO UNICO.** Disponer escombros y/o RCD, en el desarrollo de las actividades del proyecto en el predio con nomenclatura Calle 134 Bis No. 89 A, infringiendo así lo establecido en el artículo 2, II literal b) de la Resolución 541 de 1994.”*

Que el acto administrativo precitado fue notificado mediante edicto fijado el día 05 de septiembre de 2019 y desfijado el día 11 de septiembre de 2019 previa remisión del citatorio para notificación personal a la dirección reportada para tal fin, mediante radicado No. 2019EE143822 del 27 de junio de 2019.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 8 y el numeral 8 del canon 95 de la misma Carta, establecen como obligación de los particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA”, en el literal 2 establece:

“Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente...”

Que el artículo 70 ibídem, señala: “La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo (hoy artículo 67 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)

Que mediante la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se determinó que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y que la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los Establecimientos Públicos Ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la Armada Nacional, los Departamentos, Municipios y Distritos.

Que, a su vez, el artículo 5 de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental, toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que, en lo que respecta al inicio del proceso sancionatorio ambiental, el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que dicho procedimiento administrativo lo iniciará la Autoridad Ambiental, *“con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivas de infracción a las normas ambientales”*.

Que, es pertinente señalar, que, si el operador jurídico encuentra un yerro o una situación irregular en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio, cuenta con la posibilidad jurídica de corregir dicha situación, en garantía del debido proceso y en procura de la efectividad de los derechos sustanciales.

Que, por tal razón, el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“Artículo 9. Causales de cesación del procedimiento en materia ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:

- 1o. **Muerte del investigado cuando es una persona natural.***
- 2o. Inexistencia del hecho investigado.*
- 3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.*
- 4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.”*

III. CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL FRENTE AL CASO EN CONCRETO

Que una vez consultado el expediente **SDA-08-2014-2312**, se pudo evidenciar que se dio inicio al proceso sancionatorio ambiental en contra de la sociedad **PROMOTORA SAN DIEGO S A EN LIQUIDACION**, con NIT. 800.156.101-8, (actualmente cancelada y liquidada), mediante **Auto No. 02687 del 22 de mayo de 2014**, por los hechos evidenciados en el **Concepto Técnico Contravencional No. 02667 de 02 de abril de 2014**.

Que una vez revisado el Registro Único Empresarial y Social (RUES) fue posible evidenciar que la matrícula No. 00489867 se encuentra cancelada desde el 1 de abril de 2013, que a través del Acta No. 33 de la Asamblea de Accionistas del 27 de diciembre de 2011, se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad, la cual fue inscrita el 1 de abril de 2013 bajo el No. 01718355 del Libro IX. Finalmente, que, en consecuencia, y conforme a los registros que aparecen en la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad se encuentra liquidada.

Que, una vez establecido lo anterior, resulta pertinente hacer alusión, que la Cancelación de la matrícula mercantil y liquidación, supone la desaparición de la sociedad como persona jurídica.

En concepto de la Superintendencia de Sociedades, la cancelación de la matrícula mercantil conduce a que la sociedad pierda capacidad jurídica para contratar, en el entendido que la cancelación definitiva solo procede cuando previamente se ha inscrito la cuenta final de liquidación, momento a partir del cual la sociedad pierde la calidad de comerciante y, como consecuencia de la liquidación, desaparece como persona jurídica para todos los efectos legales.

Ahora bien, el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, establece para las Cámaras de Comercio la depuración de la base de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), relacionada con la disolución y liquidación de la sociedad, previo trámite de liquidación del patrimonio social. A partir de ese momento, desaparece como persona jurídica y en tal virtud, no tiene capacidad para contratar ni con el estado ni con personas naturales o jurídicas de ninguna índole.

Que el Magistrado ponente **Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL**. A través de Sentencia T-974/03 manifestó:

“El ordenamiento jurídico colombiano consagra la figura del registro mercantil, como el sistema destinado a asegurar el orden y la confianza pública en las relaciones jurídicas, mediante la anotación, actualización y certificación que una entidad especializada hace de aquellos actos, hechos o circunstancias que puedan interesar a terceros y cuya importancia jurídica impone el derecho a acceder libremente a esa información.

*En este contexto, se reconocen tres finalidades básicas en el ordenamiento jurídico para el registro mercantil, a saber: (i) Da **publicidad** a los actos, hechos o circunstancias que exige la ley, verbi gracia, el artículo 28 del Código de Comercio establece algunos de los actos y documentos sometidos a registro; (ii) Sirve como **solemnidad** para el perfeccionamiento de ciertos actos o para la formación de algunas personas jurídicas, tal y como lo dispone el artículo 71 de la Ley 222 de 1995, en relación con las empresas unipersonales y, por último; (iii) Es una herramienta para la producción de consecuencias en el **campo probatorio**, por ejemplo, (a) el artículo 6° del Código de Comercio, supone la prueba de la costumbre mercantil como fuente principal del derecho comercial, a través del testimonio de por lo menos, “cinco comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil”; (b) el artículo 13 del mismo estatuto, dispone que se presume “para todos los efectos legales” que una persona es comerciante, cuando “se halle inscrita en el registro mercantil”; (c) el artículo 117, señala que la existencia y representación legal de una sociedad se prueba con el certificado de existencia de la Cámara de Comercio donde se hayan hechos los registros correspondientes; y, a su vez, (d) los artículos 164 y 442 del Código de Comercio determinan que “para todos los efectos legales”, se conservarán como representantes legales y revisores fiscales de una sociedad, “las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio o social (...) mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”.*

Así mismo la doctrina y la jurisprudencia ha sostenido: “la representación de una sociedad permite proyectar jurídicamente del campo formal del derecho escrito (estatutos y ley) al campo real de la vida de los negocios, la personalidad jurídica de un ente societario. Con ello, se garantiza la eficacia de dicho derecho fundamental reconocido expresamente en la Constitución (art. 14 C.P), que implica la facultad de todas las personas de ejercer su capacidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones. La Corte - sobre la materia - ha precisado que:

“(...) En el campo de las relaciones jurídicas que se presentan entre los particulares, tiene especial relevancia el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (C.P. artículo 14), el cual consiste en la capacidad reconocida a todas las personas para ejercer derechos y contraer obligaciones, no sólo de contenido extrapatrimonial sino también de carácter económico. Así las cosas, no basta con sostener que una persona es sujeto de derecho, si no le es posible desarrollar los atributos que ello comporta. Sólo puede reconocerse a una persona como sujeto de derecho, si se le permite participar en la vida negocial y en el tráfico jurídico de una sociedad, ya que dichas circunstancias se convierten en las herramientas apropiadas e indispensables para poder satisfacer necesidades y ejercer los atributos derivados de la propia personalidad.

Por este motivo, la Constitución Política garantiza expresamente el derecho de todos a participar en la vida económica (Artículos 2° y 333) y, a su vez, el derecho internacional dispone que dicha participación constituye, no sólo un derecho intangible de las personas sino también una garantía estructural del ‘ius cogens’(...)”. (Sentencia T-468 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Que, al margen de lo citado, y de lo encontrado en el sistema de Registro Único Empresarial y Social (RUES), fue posible evidenciar que a través del Acta No. 33 de la Asamblea de Accionistas del 27 de diciembre de 2011, se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad, la cual fue inscrita el 1 de abril de 2013 bajo el No. 01718355 del Libro IX; por lo que ya no cuenta con personería jurídica perdiendo de esta manera la capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo tanto, ya no es sujeto de derecho.

Por otra parte, y una vez establecido que la cancelación de la matrícula trae como consecuencia la extinción de la vida social, es decir, dejar de desarrollar el objeto social para la cual se constituyó, es igualmente importante establecer, que para el caso en cuestión, la cesación del procedimiento aludida, contenida en el numeral 1) del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 que a saber prescribe "**Muerte del investigado cuando es una persona natural.**", no contempla o regula explícitamente la situación que se presenta con la empresa en cuestión, sin embargo, permite la ley una cualificación adicional, dicho de otro modo, permite hacer uso de la analogía legis en contraste con la analogía juris, tal como lo establece el Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ en Sentencia No. C-083/95 sobre la Analogía:

(...)

"La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general. La analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la Constitución."

(...)

Que, así las cosas, dicho esto, por analogía jurídica se aplicara la causal de cesación de procedimiento contenida en el numeral 1) del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 que a saber prescribe "**Muerte del investigado cuando es una persona natural.**". teniendo en cuenta que la sociedad **PROMOTORA SAN DIEGO S A EN LIQUIDACION**, con NIT. 800.156.101-8, **(actualmente cancelada y liquidada)**, no es sujeto derecho y obligaciones, por tanto, no puede ostentar la calidad de sujeto procesal dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental; como consecuencia de lo anteriormente citado, se ordenará cesar el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de la presunta infractora, dentro de este procedimiento sancionatorio ambiental iniciado a través del **Auto No. 02687 del 22 de mayo de 2014**, bajo expediente **SDA-08-2014-2312**.

IV. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

Que, el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° numeral 1 de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 modificada por la Resolución 046 del 13 de enero de 2022, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente, se delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

(...)

1. *Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.*"

(...)

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar la cesación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, iniciado mediante el **Auto No. 02687 del 22 de mayo de 2014**, en contra de la sociedad **PROMOTORA SAN DIEGO S A EN LIQUIDACION**, con NIT. 800.156.101-8, (actualmente cancelada y liquidada), de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, en atención lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Publicar la presente resolución en el Boletín Legal Ambiental de la entidad, en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993-

ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. - Ejecutoriada la presente resolución, procédase al archivo del expediente **SDA-08-2014-2312** de la Secretaría Distrital de Ambiente.

